

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-19146-2020
CARATULADO	: SAAVEDRA/FISCO DE CHILE / C.D.E.

Santiago, once de Septiembre de dos mil veintitrés

VISTO.

A folio 1 comparece el abogado Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en pasaje Doctor Sótero del Río N° 326, oficina N° 1104, comuna de Santiago, en representación de don MANUEL FRANCISCO SAAVEDRA RODRÍGUEZ, comerciante, domiciliado en calle Pucará N° 4988, casa B, comuna de Ñuñoa, e interpone demanda de indemnización de perjuicios, , en contra del FISCO DE CHILE, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, a objeto que sea condenado al pago de la suma de \$250.000.000 en favor del demandante, por el daño moral sufrido por él, derivado de un hecho criminal ejecutado por agentes estatales; o la suma que se determine prudencialment, con reajustes de acuerdo con el IPC, más intereses legales, ambos desde la fecha de notificación de la demanda o desde cuando se estime.

Manifiesta que don Manuel Saavedra Rodríguez ha sido reconocido por el Estado de Chile como víctima de prisión política y torturas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, también conocida como "Comisión Valech I", establecida por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003, figurando en el numeral 21.898.

Refiere que la calidad de víctima reconocida del Sr. Saavedra Rodríguez por dicha comisión consta en el certificado emanado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reconoce que el demandante es víctima de prisión política y tortura por parte del Estado, durante la dictadura cívico-militar.

Relata que la mañana del 28 de noviembre del año 1989, la víctima, de entonces 18 años, estudiante, se encontraba en su hogar, ubicado en calle los Abetos N° 5778, block 7, departamento 9, comuna de Conchalí, preparándose, junto a su hermano Marcelo, de entonces 17 años, para ir al liceo en donde estudiaban, el cual se encontraba ubicado en calle Buenos Aires N° 575, comuna de Recoleta.

Señala que fue en esas circunstancias, que un grupo de encapuchados, junto a carabineros, irrumpieron en su hogar, tomando detenidos a don Manuel y a su hermano. Ambos fueron trasladados a la 9ª comisaría de Carabineros de Chile. Al llegar al recinto, don Manuel fue interrogado, se le consultó por el partido político al que pertenecían y sus captores, al no obtener respuesta, comenzaron a torturarlo; fue brutalmente golpeado; se



Foja: 1

le negó el alimento y el sueño; a golpes, lo obligaban a seguir de pie; fue colgado en una barra de metal y recibió descargas eléctricas, las que le produjeron graves quemaduras en las piernas y genitales. Estos tratos crueles e inhumanos duraron aproximadamente 9 días.

Expresa que tras esto, don Manuel fue trasladado a la 5ª Fiscalía Militar de Santiago, para posteriormente ser condenado por tenencia de armas prohibida y pasar a estar durante 6 meses en la ex Penitenciaría de Santiago. Durante todo este periodo, la familia desconocía el paradero de don Manuel.

Asevera que esta situación marcó de manera determinante su vida. La tortura brutal ha sido imposible de olvidar. Su representado, vive constantemente con el miedo y preocupación de perder nuevamente su libertad. Desde ese entonces, no ha podido conciliar el sueño de forma normal, lo cual acarrea dificultades en su vida cotidiana, pues se encuentra frecuentemente cansado. En el mismo sentido, y en relación con los hechos ocurridos, su representado se ha visto afectado en diversos ámbitos de su vida, su relación de pareja, con sus hijas, no pudo terminar sus estudios, tiene problemas para continuar con los trabajos, todo esto por el temor y preocupación constante que vive.

Indica que, además, y a raíz de los hechos ocurridos, la salud de su representado se ha visto deteriorada considerablemente, lo que se ha evidenciado en el padecimiento de un cáncer renal y nódulos pulmonares. Para ambas enfermedades tuvo que someterse a operaciones quirúrgicas, las cuales conllevaron grandes gastos y largos periodos de recuperación, no pudiendo hacer su vida normal.

En cuanto al derecho, señala que los hechos señalados anteriormente son constitutivos de un crimen de lesa humanidad, según lo establecido actualmente en el artículo 7 del estatuto de Roma, pero cuya prohibición ya constituía norma de ius cogens a la época de los hechos perpetuados en perjuicio de don Manuel.

Refiere que el Estado de Chile a lo largo de su historia ha reconocido y suscrito declaraciones y convenciones a nivel internacional cuyo contenido normativo es constitutivo del Derecho Internacional de los Derechos y que establece la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, donde los estados tienen la obligación de respetar y cumplir los derechos y libertades consagrados en dichos instrumentos internacionales, los que detalla.

Expresa que, asimismo, la responsabilidad del Estado se encuentra consagrada en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas ellas, normas propias del Derecho Público. Cita al efecto, el artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, que concede una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando por su actividad provoquen un daño a una persona.



Foja: 1

Cita normativa internacional y jurisprudencia nacional e internacional abordando la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, destacando que debe ponderarse el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de los derechos humanos a la luz de las normas de carácter público e internacionales, , tornándose así en imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos; señalando que en Chile –dada su calidad de Estado miembro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos-, la lógica que debiera operar en casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos de alguna persona, tendría que ser reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber, el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros.

Finalmente, a modo ilustrativo, menciona algunos de los fallos en que la Corte Suprema ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil, cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional, lo cual denota un criterio jurisprudencial constante y consistente en esta materia.

Respecto al daño plante que en caso existe un daño de carácter moral expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima cometida en contra de la persona de la víctima. Expone doctrina y jurisprudencia sobre este elemento de la responsabilidad invocada.

A folio 11 el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de éste en todas sus partes o, en subsidio, que se rebajen sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.

Opone la excepción de reparación integral, la que funda en que el demandante ya ha sido suficientemente indemnizado con motivo de los hechos por él invocados, mediante transferencias directas de dinero (pensión anual establecida por la Ley 19.992), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales y del Museo de la Memoria, y establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

En subsidio, opone la excepción de prescripción de 4 años, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo, a su juicio, rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el



Foja: 1

actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, el 12 de abril de 2021 habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo señalado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.

En tercer lugar, y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia.

Además, en subsidio, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por el actor por parte del Estado, pues, de lo contrario, aquel recibiría



Foja: 1

un doble pago, ya que todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente Litis, y además, desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A folio 15 el demandante evacuó la réplica reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

Además, respecto a la excepción de “reparación satisfactiva o integral”, denominada también “excepción de pago”, alegada por la contraria, manifiesta que los montos que otorgan las leyes referidas por el demandado sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. En ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, refiere que pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común y supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre derecho público y derecho privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula. En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en cuanto disponen que los delitos de lesa humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación. Cita jurisprudencia al efecto.

En relación con el monto demandado por daño moral indica que no hay dinero que supla el dolor experimentado por su parte, por lo que parece hasta de mal gusto tener que justificar el peso que se solicita, como de peor gusto cuestionarlo.

A folio 19 el demandado evacuó la réplica, reiterando las argumentaciones ya vertidas en su contestación.

A folio 20 se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertido, sobre los cuales debe recaer.

A folio 40 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BDYKXHBXYER

Foja: 1

PRIMERO: Que, don Manuel Francisco Saavedra Rodríguez interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por los fundamentos de hecho y de derecho señalados en lo expositivo.

SEGUNDO: Que, el demandado solicitó el rechazo de la demanda o, en subsidio, que se rebajen sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos, en virtud de las defensas y excepción referidas en la parte expositiva de la presente sentencia.

TERCERO: Que, el demandante evacuó la réplica y el demandado la dúplica en los términos indicados en lo expositivo de este fallo.

CUARTO: Que, con el objeto de fundamentar sus pretensiones, el demandante acompañó la siguiente prueba documental:

A folio 1

1) Certificado de nacimiento de Manuel Francisco Saavedra Rodríguez.

2) Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 3 de febrero 29 de 2020, donde se certifica que don Manuel Francisco Saavedra Rodríguez se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I. Adjunta página de la nómina de víctimas reconocidas por dicha comisión de verdad, en donde figura su nombre.

3) Set de antecedentes contenidos en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), para incluir a Manuel Saavedra Rodríguez en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la comisión, consistentes en: portada principal; ficha de ingreso preso político torturado; cédula nacional de identidad; extracto informe mensual Vicaría de la Solidaridad; y, comprobante de ingreso de antecedentes.

4) Informe psicológico sobre los efectos de la prisión política y la tortura emitido a nombre de Manuel Francisco Saavedra Rodríguez, por Programa de Atención y Reparación Integral en Salud, PRAIS, dependiente del Ministerio de Salud.

5) Set antecedentes y documentos de carácter médico emitidos a nombre de Manuel Saavedra Rodríguez, por diversos profesionales y entidades, consistentes en certificados médicos, fichas médicas, exámenes, epicrisis e informes médicos.

A folio 28

6) Copia de sentencia dictada por la Corte Suprema en causa Rol N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018.

7) Copia de sentencia dictada por la Corte Suprema, en causa Rol N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015.



Foja: 1

8) Copia de sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018.

QUINTO: Que, el demandado acompañó a folio 30 ORD. DSGT N° 4792-9386, de fecha 5 de octubre de 2022, emitido por Jefe Depto. Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, mediante el cual se informa sobre los beneficios de reparación Leyes números 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874, recibidos por Manuel Francisco Saavedra Rodríguez.

SEXTO: Que, a folios 32 y 33 se agregó a los autos el Oficio ORD DSGT N° 4792-10014, de fecha 14 de noviembre de 2022, emitido por Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, mediante el cual se informa sobre los beneficios de reparación Leyes números 19.992 y 20.874, recibidos por Manuel Francisco Saavedra Rodríguez.

SÉPTIMO: Que, a folio 38, el demandante rindió prueba testimonial, haciendo comparecer a los siguientes testigos:

- Lino Enrique Palma Insulza

Al punto 2 declara que conoce al actor desde la adolescencia, años 1986-1987, cuando participaban en la Comunidad Cristiana de Estudiantes Fiscales perteneciente a la Vicaría de la Pastoral Juvenil.

Indica que en el año 1988 o 1989, el actor fue detenido junto con otros 10 estudiantes y estuvo en prisión política por 3 años, por lo que al ir a visitarlo se dio cuenta que cambió su conducta, ya no era la misma persona alegre.

Refiere que luego que salió de la cárcel se siguieron juntando con un grupo de amigos por lo que ha visto las etapas que ha atravesado. Así, lo primero que llamó su atención fue el cambio que sufrió Manuel en su actuar, salud y a nivel familiar, ya que no lograba tener estabilidad.

Indica que después de un tiempo fue detenido nuevamente, siendo víctima de torturas físicas y psicológicas, estando detenido 2 o 3 años más, y en ese periodo por las huelgas de hambre largas que hubo presentó problemas de salud, afectando sus riñones. Con posterioridad le detectaron un cáncer a dicho órgano, el que aun sigue en tratamiento.

Señala que ha tenido problemas de salud, familiares y económicos al tener que incurrir en gastos por temas de salud, sumado ello a que no ha podido desarrollarse profesionalmente, por lo que tiene una gran carga emocional y psicológica, que lo ha afectado en todos los ámbitos de su vida.

- Leonardo Enrique Terraza Inostroza



Foja: 1

Al punto 2 expone que el actor vivía en El Cortijo, en Conchalí, y participaba en organizaciones sociales, donde lo conoció en el año 1986.

Señala que no estuvo presente en su detención, pero supo que fue muy violenta. Indica que cuando salió de la cárcel era otra persona, ya que antes era alegre, participativo y muy sociable, sin embargo, luego de ser liberado este joven popular ya no frecuentaba los lugares habituales y se convirtió en una persona retraída que tenía miedo de salir.

Relata que mucho tiempo después volvió a tener contacto con él, en su calidad de dirigente de usuarios PRAIS de la comuna de Conchalí, y al verlo se dio cuenta que no era la misma persona que había conocido, ya que había perdido la alegría que tenía y estaba bastante tímido.

Señala que cuando el actor se vinculó con el programa PRAIS para ver su tema médico, que era el motivo por el cual se unió, también recibió prestaciones con psicólogos y psiquiatras del equipo especializados en daño.

▪ José Rigoberto Valdivia Mora

Al punto 2 expresa que conoció al actor en 1989 porque es fotógrafo que estaba en El Cortijo por lo que supo la historia de su detención.

Manifiesta que al verlo años después se percató que tenía graves conflictos de carácter sicológicos, sentía que lo perseguían, sentía desconfianza de todo, tenía falta de ánimo y ya no era la persona feliz que era antes, estaba muy afectado.

Además, ha visto que ha presentado varios conflictos de salud, como el cáncer, y también familiares con su pareja e hijos, lo que ha derivado en que no tenga estabilidad familiar producto de sus problemas emocionales y sicológicos.

Agrega que ya no tiene proyectos de vida, ya que vive con miedo que lo vuelva a buscar, todo lo cual lo asocia a los episodios de tortura que vivió.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido, del mérito de las probanzas descritas, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido el demandante víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

NOVENO: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la



Foja: 1

infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

DÉCIMO: Que los vejámenes de que fue víctima el demandante de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

UNDÉCIMO: Que, asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2);



Foja: 1

teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

DUODÉCIMO: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$ 1.353.798 y \$ 1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de 1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

DÉCIMO TERCERO: Que las leyes precedentemente señaladas, denominadas "leyes de reparación", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la



Foja: 1

ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

DÉCIMO CUARTO: Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

DÉCIMO QUINTO: Que la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

DÉCIMO SEXTO: Que la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

DÉCIMO OCTAVO: Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BDYKXHBXYER

Foja: 1

lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que el demandante fue víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquél secuelas como las descritas en el libelo, y también por el informe acompañado, suponiendo todo esto una inconmensurable aflicción tanto espiritual como física experimentada por el actor, difícilmente superable por el mero transcurso del tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

VIGÉSIMO: Que el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse el actor privado arbitrariamente de su libertad personal y luego sometido a diversas modalidades de tortura. De esta manera, las conductas materializadas por agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por el demandante, encontrándose el primero en definitiva, obligado a indemnizar al segundo.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que, mediante oficio remitido a este tribunal por el Instituto de Previsión Social, se acreditó que el actor ha sido beneficiario de pensiones pecuniarias por parte del Estado, en virtud de las denominadas “leyes de reparación”.

Debido a ello, y teniendo presente lo ya consignado en el considerando duodécimo, la suma que con motivo de esta sentencia se concederá al demandante a título de daño moral, se fijará en la suma de \$40.000.000.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda



Foja: 1

vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, es cierto también que la decisión contenida en la misma sentencia se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar esta suma de dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su notificación legal. En este sentido, la meramente hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual de medios recursivos en su contra, no enerva la aptitud del fallo para disponer actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce a que en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarán sin resarcir.

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

VIGÉSIMO CUARTO: Que no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **se declara:**



Foja: 1

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.

II.- Que se acoge, parcialmente, la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, a folio 1, sólo en cuanto se condena al demandado Fisco de Chile, al pago de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), por concepto de daño moral, en favor del demandante Manuel Francisco Saavedra Rodríguez.

III.- Que la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte demandada y hasta la época de pago efectivo.

IV.- Que cada parte asumirá sus costas.

Regístrese y notifíquese.

Pronunciada por Luis Eduardo Quezada Fonseca, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, once de Septiembre de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BDYKXHBXYER

